

# Colombia: economía y política en la década 80-89

Augusto Trujillo Muñoz

La década de los ochenta fue escenario de importantes procesos de cambio en el seno de la sociedad colombiana. Desde la apertura política del año 82 hasta la crisis económica del año 89, se dio una sucesión de hechos que, de alguna manera, modificó el rostro del país en términos que aún no han sido suficientemente examinados por los analistas. En medio de esos hechos el problema de la violencia, la crisis de la deuda externa y el fenómeno del descentralismo se convirtieron en los signos más característicos del decenio. El primero se agudizó de tal manera que colocó al país a la cabeza de un registro estadístico vergonzoso; el segundo afectó sensiblemente los índices de crecimiento; el último remozó instituciones vitales del Estado, inició un proceso de fortalecimiento local y dinamizó la sociedad hacia formas más democráticas de participación. En medio de la complejidad de todos estos factores la nación colombiana ha sido protagonista —y a veces más bien espectadora— de una historia difícil, conflictiva, paradójica, que ha puesto a prueba casi todo en el amplio espectro de la vida nacional, desde la estabilidad de las instituciones hasta la capacidad de reacción y de asombro de los ciudadanos.

Pero además, la década nació trayendo consigo una doble licencia que habría de producir múltiples efectos: la primera flexibilizó los códigos éticos hasta el punto de deteriorar los hábitos públicos. La segunda creó un

sistema de privilegios políticos que convirtió a los partidos en cuerpos impermeables a las pulsaciones del país y a los jefes regionales en beneficiarios exclusivos —y no siempre legítimos— de la empresa partidaria. A juicio del exministro Jaime Castro, semejante situación “produjo una desarticulación entre el Estado y la sociedad; condujo a la clientelización de la política, medio atípico de participación ciudadana; y creó formas también atípicas de expresión colectiva como la abstención, el paro cívico y parcialmente la guerrilla”. Apelando al esquema planteado por Jorge Eliécer Gaitán un poco antes del medio siglo, puede decirse que en los años ochenta se puso en evidencia un divorcio entre el “país político” y el “país nacional”, que dejó un inmenso vacío de participación democrática y de confianza frente a las instituciones representativas. Todo aquello generó un escenario propicio para la acción de los grupos armados, para el incremento de los negocios ilícitos y para el deterioro de los valores morales. En medio del divorcio mencionado se ha venido instalando una especie de “cultura de los antivalores”, que contaminó la actividad política, resintió la credibilidad en las instituciones y deterioró el sentido de la solidaridad propio de las comunidades organizadas.

A partir del medio siglo la *economía* colombiana comenzó a experimentar un proceso de crecimiento altamente satisfactorio. Entre 1950 y 1970 el Producto Interno Bruto se

incrementó en más del 275 por ciento, lo que significa uno de los niveles más altos de América Latina, sólo superado por Brasil, México y Venezuela. En esas tres décadas se inició y consolidó el fenómeno de la urbanización del país y se mejoraron las formas de redistribución del ingreso. Sin embargo, el economista Jesús Antonio Bejarano sostiene que esa circunstancia puede caracterizarse por una especie de "estabilidad regresiva" en el sentido de que la distribución del ingreso no cambió sensiblemente y, a pesar de los buenos resultados en materia de crecimiento durante los años setenta y del buen comportamiento del sector externo, en ese período el fenómeno de la pobreza absoluta que era fundamentalmente rural empezó a convertirse en un fenómeno tanto rural como urbano.

De todas maneras, en 1981 la economía colombiana evidenció las primeras expresiones de crisis. La producción nacional medida por las estadísticas del Producto Interno Bruto, comenzó a crecer a ritmos inferiores a los históricos, aumentó el desempleo y se aceleró la inflación. A partir de ese año el sector público registró déficits también superiores al promedio histórico, los cuales por haber sido financiados con emisión contribuyeron a la crisis cambiaria del 84 e inclusive al problema de la deuda externa que actualmente pesa sobre el país. Todo este viraje negativo está asociado igualmente a la caída del precio internacional del café que también nació con la década. Es evidente que los factores internacionales generan impactos en el manejo económico interno. Con la caída de los *términos de intercambio* y la *reducción en las exportaciones de café* y en *las de bienes menores*, el país pasó de registrar superávits a registrar déficits comerciales a partir del año 81. En 1983 se produjo un nuevo golpe para el comercio exterior con el cierre de los mercados vecinos de Venezuela y Ecuador y la devaluación de sus monedas. Para esos días se encontraba virtualmente cerrado el crédito internacional en razón de la crisis mexicana de finales del 82, lo cual agregaba factores negativos al manejo de la economía. En esas condiciones la actividad económica no podía ofrecer indica-

dores favorables. En 1981 el crecimiento del PIB fue apenas superior al 2 por ciento; en 1982 bajó al 0.9; y en 1983 del 1 por ciento. En ese período el crecimiento de la industria fue negativo y se estancó la actividad agropecuaria, que en la década anterior había registrado dinámico comportamiento. Igualmente se suscitó una aguda crisis en el sector financiero que amenazó con deteriorar la credibilidad de la banca, pero que fue oportunamente conjurada con medidas oficiales. De todas maneras aquella recesión generalizada produjo consecuencias sociales, particularmente en el mercado del trabajo y en los ingresos urbanos. El sector informal creció y llegó a ocupar más del 50 por ciento de los trabajadores activos de las ciudades. Según el exministro Guillermo Perry "la entrada forzada de estos nuevos contribuyentes a este sector, en una situación de recesión económica, condujo a un deterioro de más de un 20 por ciento en los ingresos promedios reales de los trabajadores por cuenta propia (entre junio de 1982 y septiembre de 1984) y a un descenso continuo de la productividad en actividades como el comercio desde el año de 1980". Aquellos fueron días difíciles para la economía y para el país por multiplicidad de factores. El crecimiento del déficit fiscal, la caída de las reservas internacionales, la dimensión que fue adquiriendo una deuda externa sujeta a crecientes intereses, la decadencia de la inversión privada, el incremento del desempleo, eran signos inequívocos de que el país padecía una fuerte crisis. En el contexto internacional, las naciones desarrolladas —inmersas también en el problema de sus propias economías en desequilibrio— lanzaron por la borda a las demás al restringir sus importaciones y conducir las hacia un alto grado de endeudamiento.

Sobre 1984 el país vivió además una agudización del problema de la violencia. A la cuestión guerrillera se agregó el problema del narcotráfico que trajo su propia violencia. Su primer dramático aviso fue el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara. Pero al mismo tiempo vivió el más afortunado proceso de apertura política que gobierno alguno decidiera plantear en los últimos años. Es bien interesante registrar las caracterís-

ticas de aquel proceso de reformas, por cuanto en cierto modo se dieron casi que sin la participación real de los partidos políticos, un poco por encima de la voluntad del Congreso, a contrapelo de buena parte de la clase dirigente. Los partidos políticos colombianos desatendieron cada vez más el debate de los grandes temas nacionales. Se dedicaron, por el contrario, a construir una poderosa maquinaria de movilización de clientelas políticas, para poder sobrevivir frente al vacío de opinión que comenzó a agobiarlos. A diferencia de otros tiempos, la década de los 80 abrió honda brecha entre los partidos y los distintos sectores de opinión. Por eso el país se vio obligado a desplazar el análisis de las ideas hacia otros escenarios y a preferir los foros gremiales, profesionales, cívicos o universitarios, en los cuales se examina con evidente seriedad la problemática colombiana. Los partidos se han venido divorciando lenta pero irremediamente del país, del interés superior de la nación. Han convertido el sistema de la representación en un mercado electoral y por ese procedimiento cualquier cosa puede adquirir un título de adhesión popular. Sus más conspicuos dirigentes, sobre todo en el nivel regional prefieren un país más restringido, menos abierto o más propicio para el electorerismo profesional, cuyo secreto reside en manejar un estilo político que impide a los electores cualquier posibilidad de liberación, pero alimenta siempre su ilusión de libertad y de poder. Por esas mismas razones resulta normal que los cambios operen sin una participación institucional de los partidos.

El Congreso es un órgano fundamental de la estructura republicana, pero la eficacia de su funcionamiento depende en buena medida de la dinámica que se le imprima desde los partidos políticos. A todo parecer, a nuestros parlamentarios no les preocupa tanto las conquistas reales de la democracia, como la simple consagración legal de los principios. El Congreso constituye una base insustituible de la vida republicana, pero si no funciona cabalmente como un órgano de representación popular no podrá resolver adecuadamente los problemas de la organización democrática. Es cierto que el Congreso colom-

biano votó mayoritariamente casi todas las medidas que le fueron propuestas en desarrollo de ese complejo proceso de cambios que se precipitó con la llegada al Gobierno del presidente Betancur. No de otra manera hubieran podido implementarse las medidas respectivas. Pero también es cierto que lo hizo más por ausencia de alternativas o por incapacidad de resistir la enorme fuerza institucional que en Colombia acompaña al órgano ejecutivo, que como consecuencia de una auténtica voluntad política de propiciar esquemas nuevos que pudieran enriquecer la actividad democrática. Como si lo anterior fuera poco, la dirigencia insurgente, es decir la que era expresión de la guerrilla, también se equivocó de comportamiento. A la generosa política de paz —de seguro excesivamente generosa— respondió con salidas erráticas, producto de sus propias inconsistencias políticas, y regresó a las armas y a la violencia absurda desaprovechando la que pudo ser una feliz coyuntura para alcanzar la paz en Colombia.

En un escenario presidido por el regreso a la violencia, el país decidió iniciar un proceso de ajuste en materia económica, pensando quizás que cuando la economía está bien las demás cosas aguantan. Dicho proceso se orientó a controlar el desequilibrio fiscal, a revertir el déficit de la balanza de pagos, a alcanzar una tasa de cambio realista y a buscar una normalización de las relaciones nacionales con el sistema financiero internacional. Sobre la mitad de la década la economía volvió a presentar un "cuadro" positivo. Para 1985 el crecimiento del PIB volvió a ser superior al 3 por ciento y el sector externo comenzó a mejorar significativamente. La reactivación empezó a reflejarse en todos los sectores y surgió un ambiente propicio para la inversión, estimulado por la reforma tributaria de 1986. Para este año el PIB creció al 5 por ciento, cifra que se mantuvo en el año siguiente y que sólo descendió en 1988 para situarse ligeramente por debajo del 4 por ciento. El desempleo, así mismo, descendió en forma significativa. El crecimiento más o menos sostenido del PIB sólo se quebró en el año 89, en el cual bajó a cifras inferiores al 3 por ciento. El co-

mercio, la industria y los servicios se resintieron sensiblemente. Sólo el sector agropecuario creció con vigor en ese período.

Con la llegada de la administración Barco se anunció la inversión de buena parte de los recursos oficiales en el programa de erradicación de la pobreza absoluta y en la rehabilitación de las regiones caracterizadas por la falta de presencia del Estado en la prestación de los servicios básicos. Se promulgó entonces un Plan de Economía Social que establecía una estrategia en la cual convergían el cambio económico y el cambio social, de acuerdo con la filosofía que supone que el crecimiento cumpla una función social y, a la vez, el desarrollo social sea factor de crecimiento. Independientemente de los buenos o malos resultados del plan, su formulación suponía el reconocimiento de un hecho tan evidente y curioso, como característico de buena parte de la presente década: la contradicción implícita en el proceso de crecimiento económico con agudos problemas de violencia e inseguridad. El economista Antonio José Urdinola sostiene que es difícil encontrar un país del Tercer Mundo donde simultáneamente se haya observado una mejoría tan sustancial de la estructura educativa de la población, con la permanencia de una distribución del ingreso tan altamente concentrada como la colombiana. Mientras el país hizo un gran esfuerzo de inversión en capital humano en las últimas tres o cuatro décadas para mejorar la calidad educativa de su fuerza laboral, no logró desarrollar al mismo tiempo fuentes de trabajo suficientes para absorber el creciente volumen de sus egresados que se vieron obligados a aceptar puestos de trabajo o niveles de remuneración insatisfactorios. El descontento surgido a raíz de ese fenómeno se sucedió sobre todo en la clase media y generó las migraciones hacia el exterior, particularmente a los países vecinos y a los Estados Unidos.

Se originó un proceso de empobrecimiento de la clase media que hizo proliferar el trabajo informal de personas de ciertos niveles de educación y presionó el crecimiento de la burocracia, hasta el punto de que cerca del 50 por ciento de la población universitaria se halla al servicio del Estado en sus distintos

niveles. Y como el empleo público en Colombia tiene un carácter clientelista, lo que se busca es maximizar el número de clientes más bien que su remuneración individual. Como consecuencia de semejante esquema se reduce la calidad de la administración y se estimula la corruptibilidad. Por todo eso resulta explicable que los dos productos extremos del cuadro actual de las contradicciones de la sociedad colombiana, la guerrilla y el narcotráfico, estén típicamente conformados por sectores de la clase media.

En la medida en que aquella problemática se iba consolidando, surgía en amplias capas de la población un fenómeno de desconfianza en la capacidad del Estado y de sus instituciones para responder adecuadamente a sus requerimientos y resolver las injusticias que directamente percibían. Por lo tanto, allí había un terreno abonado para la violencia. El expresidente López Michelsen en un foro de Cámaras de Comercio y otros organismos del sector privado, celebrado en Cartagena en octubre/89, sostuvo que el fenómeno de la urbanización generó un fuerte desequilibrio entre la migración campesina que hizo crecer aceleradamente las ciudades, y los recursos del Estado para dotar de servicios públicos a todos aquellos que venían a pedirlos. De esos asentamientos urbanos irregulares surgió el paro cívico, la protesta de los defraudados por el atraso y la injusticia en que vivían, y la guerrilla que, al menos en sus primeros orígenes, tuvo para muchos jóvenes latinoamericanos una connotación heroica como instrumento para llegar a lo que entonces creyeron la tierra prometida. Es evidente que cuando no se perciben soluciones del Estado para resolver los problemas de los individuos, aparece en éstos la tendencia a buscar las soluciones por otras vías menos ortodoxas pero seguramente más expeditas.

Lo que no resulta tan evidente son las razones que expliquen el crecimiento de la economía en ese cuadro desesperanzador, pues es bien sabido que cuando no existe un "ambiente general" de tranquilidad que haga atractiva la inversión, ésta no aparece fácilmente para contribuir al desarrollo. Yo me atrevo a aproximar una primera explicación en la calidad misma del elemento hu-

mano con que cuenta Colombia. La referida informalidad ha convertido a una gran cantidad de gentes sin horizonte en empresarios con relativa prosperidad. El colombiano es en general una persona con imaginación que tanto en la bonanza como en la adversidad —y quizás mejor en esta última— sabe aprovechar oportunidades y administrar con cierta eficiencia los recursos a su alcance, en este caso la misma imaginación y su propia capacidad de trabajo. Así como algunos reaccionaron con agresividad tomando el camino del delito supuestamente para solucionar de inmediato su situación personal y otros el camino de la guerrilla para resolver a más largo plazo los problemas sociales y transformar la sociedad, contribuyendo ambos a incrementar el fenómeno de la violencia; los más asumieron en silencio el compromiso solitario de trabajar para sí rebuscando oportunidades y aprovechándolas, en el convencimiento de que "la prosperidad viene en saber aprovechar recursos y no necesariamente de tenerlos". En esta forma personas que no tenían nada han logrado sobrevivir, se han convertido en paliativo de las tensiones sociales y han incorporado a un gran número de marginados a la economía del país. Por lo tanto resulta explicable el crecimiento económico en ese escenario, en el cual el aporte de esas gentes de trabajo resulta más significativo que los perjuicios de la violencia y del terrorismo.

Pero además, como se mencionó al comienzo, durante la presente década se evidenció como nunca antes el divorcio entre el país político y el país nacional. Aquél redujo la actividad pública al simple marco de la administración electoral y la política al arte de maniobrar desde el gobierno o desde la oposición. Entre tanto, crecían los problemas sociales y las tensiones de la violencia y de la inseguridad en términos que generaron en el seno del país nacional una sensación inequívoca de irresponsabilidad dirigente. En la medida en que la política se clientelizó, mayor rechazo suscitó en las capas poblacionales no vinculadas al esquema de clientelas. El asesinato de jueces, periodistas, campesinos, líderes populares y dirigentes que se atrevían a denunciar la violencia organizada y a re-

clamar el regreso a una jerarquía de valores parecía no conmover al país político. No *pasaba* nada en el sentido de que la dirigencia parlamentaria permanecía impasible ante el proceso de deterioro. Como era apenas natural, por *esa vía* se fue rompiendo el sentido de solidaridad social y al fenómeno de la irresponsabilidad dirigente le surgió como *respuesta* una indiferencia ciudadana que evidentemente contribuyó a la desesperanza y a la impunidad. Mientras tanto el colombiano promedio trabajaba volcado sobre sí mismo, introvertido, sin participar para nada en el proyecto que todos deben construir como nación, dejando la actividad pública a los políticos tradicionales, al alto gobierno y a los pocos que reclamaban por la recuperación de los valores y demandaban el regreso al esfuerzo colectivo por las causas comunes. Ese trabajar sin participar contribuyó al crecimiento económico pero también a la indolencia ciudadana. Fue cuando los dirigentes de la industria exclamaron: "La economía está bien, pero el país está mal".

Con el cambio de gobierno producido a raíz de las elecciones presidenciales del 86, el país presenció un *hecho* de gran importancia política. El tránsito de un "gobierno nacional" a un "gobierno de partido". En principio el esquema Gobierno-Oposición es teóricamente más democrático y suele ser más transparente que aquél que pretende incorporar a todos los sectores en un consenso en el cual puede perder sentido la crítica. Pero ese esquema no puede funcionar sino dentro de un régimen de autenticidad política real y de organización partidaria eficiente. La primera supone una capacidad consciente de decisión con posibilidades reales de evitar que las decisiones sean adulteradas. La segunda una estructura coherente y flexible con credibilidad general y calidades o condiciones para realizar idóneamente el doble proceso de la formación política del pueblo y el de su expresión electoral. Infortunadamente en Colombia tanto el sistema como los partidos tienden a considerar la toma de conciencia popular como una actitud peligrosa para el establecimiento y no como una necesidad prioritaria de la democracia. A su vez, los partidos no forman a sus electores

para garantizar su activa participación en la toma de decisiones, ni estimulan el proceso de hacer más auténtica la soberanía del pueblo, ni crean los medios para su expresión responsable y consciente. Por el contrario, dejan prosperar un estilo político que amarra a los electores al esquema clientelista, mientras en forma demagógica alimentan ilusiones y esperanzas. A todo parecer no existe en Colombia autenticidad política ni organización partidaria. Por eso el esquema Gobierno-Oposición no funcionó en beneficio de la democracia colombiana, a pesar de los grandes esfuerzos de sus inspiradores. Y el gobierno de partido se desgastó intentando aclimatar su esquema, entre otras razones porque carecía de partido de gobierno y carecía de partido de oposición.

Durante la presente década Colombia no pudo escapar al fenómeno latinoamericano más característico de estos tiempos. El de la deuda externa. Después de un fácil acceso de estos países al mercado internacional de capitales durante la década anterior, en los ochenta las cosas cambiaron radicalmente. La crisis comenzó cuando México se vio obligado a cesar el pago de sus compromisos ante la incapacidad de conseguir recursos para financiarlos. La banca internacional comenzó a perder fe en su mercado latinoamericano y del Caribe, y estos países se vieron forzados a adoptar programas de ajuste macroeconómico. Para el conjunto de la región el Producto Interno Bruto total decreció en 1 por ciento en el 82 y el 2.5 por ciento adicional en el 83. Entre el 84 y el 87, creció a un promedio anual del 3.5, después de haber crecido casi al 6 por ciento en la década anterior. La caída de la producción incrementó el desempleo e impactó duramente a los sectores medio y bajo de la población. Para 1987 el 40 por ciento de los latinoamericanos vivía por debajo de la línea crítica de pobreza y la mitad de ellos no alcanzaba a llenar sus capacidades nutricionales. Sin pretender eximir de *responsabilidad* a los países deudores, que alegremente quisieron crecer a debe, también hubo factores no controlados por las economías de estos países y afán de la banca comercial por colocar los recursos provenientes del

reciclaje de los petrodólares. El caso de Colombia es menos apremiante que el de otros países latinoamericanos, en primer lugar porque los recursos obtenidos en el exterior se destinaron realmente a financiar los programas previstos y en segundo término porque el país ha logrado preservar sus posibilidades de acceso al mercado internacional de capitales. A base de una política prudente el Gobierno Nacional ha consolidado su carácter de buen acreedor frente a la banca comercial, con la cual los compromisos no superan el 35 por ciento del total de la deuda. Sin embargo el país ha sido víctima de lo que se dio en llamar "el efecto de barrio"; y por supuesto comparte el agobio de un área que transfiere cada año al mundo industrializado aproximadamente 30 millones de dólares en un contrasentido que convierte a los países pobres en exportadores de capital hacia las arcas de los ricos. Esta es la circunstancia que ha hecho exclamar al expresidente Pastana que el tratamiento dado al problema de la deuda constituye por parte de los países acreedores una ignominia y por parte de los países pobres una gran ingenuidad. De todas maneras situaciones semejantes sucedidas en el pasado en otras latitudes enseñan que esas crisis sólo se solucionan o porque se condona alguna parte significativa de la deuda externa o porque los flujos voluntarios de capitales externos volvieron a comenzar. La solución que no parece haberse presentado nunca es la de que los países deudores hayan podido generar un excedente de su propio ahorro interno que permita amortizar significativamente su endeudamiento externo.

El fenómeno de la descentralización también ocupó la atención nacional durante casi toda la década. Sin querer ignorar otros antecedentes, el más importante es sin duda el de la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente López en 1976, encaminada a modificar el régimen departamental colombiano. Casi diez años después el presidente Betancur logró concretar las primeras grandes reformas que en lo político, lo administrativo y lo fiscal iniciarían el saludable proceso de fortalecer la vida regional y producir una acción que tocara en el fondo de

la problemática social y política del país. La elección popular de alcaldes, la creación de las Juntas Administradoras Locales, el traslado al municipio de nuevos recursos y de nuevos problemas, tendía a acercar los polos fundamentales de la organización social que son la autoridad y la comunidad. El general Rafael Uribe Uribe decía desde comienzos del siglo que "autoridad lejana es autoridad ausente, y autoridad ausente es autoridad nula". Al acercar estos dos polos se estaba convirtiendo el municipio en el punto cabal de encuentro entre la sociedad civil y el Estado. El exministro Otto Morales Benítez nos recuerda en alguno de sus libros el juicio del profesor Gerardo Molina, según el cual las dos entidades clásicas, el Estado y el individuo, han venido rodando en nuestra historia cada uno por su lado. Sólo excepcionalmente se ha encontrado en términos capaces de generar una acción creadora, o al menos renovadora, de la organización social. De seguro, el fortalecimiento local incorporado en la reforma descentralista tiene en su base esas potencialidades.

Desde el punto de vista electoral se abusó del alcance de la descentralización, sobre todo por parte de los más conspicuos voceros de la politiquería tradicional. Dicho en otras palabras la clase política generó en el pueblo expectativas exageradas, pues presentó la reforma descentralista como mecanismo válido para resolver todo tipo de problemas. Pero de seguro en la base conceptual de los más serios inspiradores de la reforma estaba el pensamiento del presidente Mitterrand: "Si Francia tuvo necesidad de un poder fuerte y centralizado para hacerse, ella tiene hoy necesidad de un poder descentralizado para no deshacerse". La reforma política mirada después de la primera elección popular de alcaldes no parece haber mejorado significativamente la situación del municipio colombiano, pero abrió la puerta a la participación de las comunidades locales en términos capaces de generar un proceso que a mediano plazo puede incidir hondamente en el destino mismo de la nación. Como alguien ha dicho, la nueva autonomía del municipio se valida por el simple hecho de tratarse del nivel del Estado que se encuentra

más próximo a la comunidad. En ese sentido ya no se ve al Estado tanto como lugar de confrontación y ejercicio de la política, sino como proveedor de servicios que satisfagan las necesidades de la población, la cual a su vez tiene más posibilidades de acceso al escenario donde se toman las decisiones locales. En consecuencia este proceso ha resultado positivo para las comunidades que están encontrando de nuevo un significado cívico a su participación y para la democracia porque está en condiciones de enriquecerla en la medida en que el país sepa entender que en el fondo no es más que la suma integrada de sus distintas regiones.

Finalmente resulta oportuno hacer mención de los últimos sucesos del período, ubicados en el vórtice de dos décadas definitivamente fundamentales para lo que habrá de ser el destino nacional en el próximo milenio. Desde el segundo semestre de 1988 los síntomas de la economía comenzaron a ser desalentadores. Salvo el nivel de desempleo que, aun para el año 89, es el más bajo de la década, es innegable que el crecimiento económico se frenó notoriamente. El año 88 registró un índice que no alcanzó al 4 por ciento, y el 89 estará por debajo del 3. Aun cuando se considera que Colombia constituye un caso especial en el contexto latinoamericano porque ha podido crecer durante la década y no ha tenido necesidad de reprogramar su deuda externa; sin embargo el Banco Mundial considera que el país está en mora de hacer reformas profundas en su economía, particularmente en lo que hace relación a su apertura al extranjero. Este es un debate que ha ocupado mucho la atención de gobernantes y especialistas en los últimos años de la década, y que coincide con el auge del neoliberalismo a partir de los resultados económicos de otros países del continente y del mundo. En ese sentido la discusión entre los doctrinantes que abrevan en la Escuela de Chicago ubicada al borde de los grandes lagos, y los que nutren su pensamiento en el Atlántico en donde están ubicadas Harvard, Yale, Princeton, etc., se convirtió en una de las más importantes del final de la década en Colombia. De alguna manera es el mismo debate entre quienes

presionan la privatización de la economía y quienes abogan por la intervención del Estado, alegando razones de eficiencia los primeros y razones de equidad los segundos. Los exministros Hernán Echavarría Olózaga y Hernando Agudelo Villa pueden considerarse respectivamente como los más calificados voceros de cada una de las dos tendencias. Mientras todo este debate se desarrolló, los signos económicos desmejoraron y no pocos dirigentes empresariales comenzaron a prevenir sobre la recesión económica desde antes de finalizar el primer semestre del año 89. Salvo el sector agrícola, que se comportó positivamente, los demás sufrieron deterioro y algunos tuvieron crecimiento negativo. Y como si ésto fuera poco, la declabe en el mercado cafetero internacional, los atentados terroristas contra los oleoductos y la declaración de guerra al narcotráfico resintieron aún más la salud de la economía. Las sombras de la recesión comenzaron a tomar forma y las perspectivas de un ajuste con incremento en los precios de los combustibles, aumento en los ingresos del Estado y freno tanto en el gasto público como en el alza de los salarios, aparecen en el horizonte como un reto para los colombianos a partir del año 90.

En general los entendidos aceptan la tesis de que es necesario introducir reformas en el modelo de desarrollo colombiano. Pero el conflicto entre el agua dulce y el agua salada polariza el cuadro doctrinario en términos que dificultan la apreciación de los grises que aparecen entre los dos extremos. Hay quienes señalan el ejemplo de Chile, subrayando sus niveles de crecimiento económico que, evidentemente, han sido durante la década los más altos de América Latina. Los adversarios responden exhibiendo las iniquidades sociales que hicieron afirmar al escritor Jorge Edwards la existencia de dos Chiles: uno que se parece a Copenhague y otro que se parece a Calcuta. No faltan las confusiones de dirigentes que pretenden identificar plenamente la naturaleza del modelo chileno *con la* de los países del sureste asiático, olvidando que el primero se basa en la libertad de las leyes económicas y el segundo en un modelo vertido hacia afuera, pero con vigorosa intervención y planificación de sus

economías. También confunden lo que sería reducir la intervención del Estado en Inglaterra, un país maduro cuya participación en el Producto Interno Bruto supera el 45 por ciento, con lo que sería reducirla en Colombia, un país joven que todavía debe construirlo casi todo y cuyo sector público apenas llega al 15 por ciento del PIB.

De todas maneras es difícil no estar de acuerdo con la apertura del país a las corrientes internacionales de la inversión, de la cultura y de la tecnología. Allí viene la importancia de los grises. El economista Salomón Kalmanovitz sostiene que "La política de protección ciertamente ha contribuido a consolidar odiosos monopolios y grupos industrial-financieros, a que ellos sean ineficientes y a que abusen del consumidor. Pero al mismo tiempo una apertura sin preparación contribuiría a borrar muchos empleos y si las importaciones se financian con rentas agrícolas o de recursos naturales, barrerán con buena parte del trabajo productivo que se efectúa en el país". Lo que sí parece estar definido es que la decisión sobre este problema será dejada en manos del nuevo gobierno.

A partir de agosto del 89 las prioridades que se venían aplicando fueron modificadas en Colombia. El asesinato del senador Luis Carlos Galán, el hombre más prestigioso del país en ese momento, obligó al gobierno a declararle la guerra a la delincuencia organizada y a plantear la universalización del tratamiento al problema del narcotráfico. Aún se desconocen los costos reales de esa guerra y sus secuelas en el seno de la sociedad colombiana. Pero al menos sirvió para recuperar un poco la imagen internacional del país y para alertar a los colombianos sobre la urgencia de rescatar también una escala de valores. A lo mejor la década del 90 traiga consigo una nueva actitud de los colombianos no sólo frente a la violencia sino frente a la crisis moral. Estos no son fenómenos exclusivos de Colombia pero es allí donde actualmente golpean con más fuerza. Cuando el delito se multiplica la autoridad se resiente en su capacidad de acción para restablecer la normalidad. Pero de allí puede surgir también con más fuerza la gran necesidad colec-

tiva de recuperar la vigencia plena de unas instituciones que garanticen la seguridad y los derechos ciudadanos. El expresidente Belisario Betancur en un foro universitario que tuvo lugar en Ibagué en julio de 1989, recordó que en algunas universidades del mundo se ha venido dictando la cátedra de "desorden social", con la mira de que los estudiosos y los dirigentes "prevengan y comprendan lo que está tomando cada vez más fuerza. Y esos cambios se producen con dolor, con mucho dolor, el mismo que con recrudecimiento crítico estamos viviendo en Colombia".

A principios de noviembre/89 García Márquez afirmó en un artículo de prensa difundido en Bogotá y en otras ciudades del país, que quizás lo más sorprendente de los colombianos es su asombrosa capacidad de acostumbrarse a todo, pero con un poder de re-

cuperación que raya en lo sobrenatural. De alguna manera esa especie de juicio mágico coincide con el criterio científico social del profesor Antonio García, para quien "en los momentos más críticos la misma sociedad, violentamente emulsionada o violentamente rota, crea los instrumentos y los equipos humanos que sintetizan una dirección de su historia". Yo creo que en esta crisis del final de la década, los colombianos están comenzando a repensar su país y, ante la falta de principios en la política y la falta de liderazgo en la Nación, las propias comunidades estimuladas por la sucesión de tantos impactos y por las mismas potencialidades del proceso descentralista, sabrán encontrar canales de participación para rescatar al país de la degradación espiritual y comprometerlo en un propósito de superación, sobre el cual descanse el porvenir colectivo.

